
La “guerra prolongada” de las FARC

Daniel Pécaut*

De entrada, hay dos características de las FARC que llaman la atención. Su longevidad, primero: oficialmente, están constituidas como tales desde 1966, por lo que tienen más de 40 años. El mantenimiento de su cohesión, después: a pesar de la impresionante expansión territorial que han tenido a partir de 1980 y de los recursos económicos que manejaron entonces, su unidad organizacional permaneció intacta hasta hace muy poco. Pero sería un error subestimar sus transformaciones en el transcurso de las décadas y las de sus formas de influencia en la sociedad. La falta de continuidad es, al menos, tan considerable como la continuidad.

LA FASE DE FORMACIÓN

Al principio, las FARC se ubican en la prolongación de las luchas agrarias que marcaron a Colombia desde 1920, y de las formas de autodefensa campesina constituidas durante el periodo de La Violencia.

Las luchas agrarias se deben a la concentración de la tierra, que siempre ha prevalecido, y, por ende, a la gran cantidad de “campesinos sin tierra”. Pero remiten también a un proceso que ha tenido una particular amplitud en Colombia y se extiende hasta nuestros días: la colonización continua de regiones que todavía están casi sin ocupar, y que se encuentran considerablemente fuera del control de la autoridad y de las inversiones del Estado. De manera frecuente, La Violencia acompaña esta conquista de nuevas fronteras, en la medida en que a los primeros ocupantes, que se reclutan

* Traducción del francés de Arturo Vázquez Barrón.

entre los más pobres, les resulta muy difícil obtener títulos de propiedad y a menudo son rechazados por los miembros de las elites económicas y políticas. La guerrilla encuentra desde el principio una base de apoyo entre esta población de colonos.

El episodio de La Violencia es el otro origen de las FARC. Esta guerra civil rural dejó 200 mil muertos entre 1946 y 1960. Suscitada por la disputa por el poder a la que se entregan los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador, entre los que se divide la sociedad colombiana desde 1850, La Violencia se manifestó entre las poblaciones de caseríos vecinos con enfrentamientos de una atrocidad comparable a la de la guerra de España. Las autodefensas campesinas, algunas de las cuales tenían influencia del partido comunista, se constituyen como mecanismos de resistencia.

El núcleo inicial de las FARC surge de estas dos experiencias. Manuel Marulanda, quien seguirá siendo el líder militar incuestionable de la organización hasta su muerte en 2008, es su símbolo. Jacobo Arenas, quien se presenta más como estratega político, va a ser la otra figura preponderante, hasta su muerte en 1990. Desde 1964, el ataque del ejército contra Marquetalia, uno de los focos de autodefensa comunista, provoca su adhesión a un nuevo estilo de lucha armada contra el régimen. Marquetalia estará en la base del relato fundador que sirve para legitimarlo. Por medio de Marulanda se construye una visión “campesinista”, que va a sobrevivir a la urbanización rápida del país –30 por ciento en 1965; 78 por ciento en 2008– y al cambio del perfil de la población de las zonas de colonización.

La mitad de la década de los sesenta corresponde también al momento de la efervescencia política que se apodera de América Latina luego de la victoria castrista. Dos, y pronto otras tres organizaciones guerrilleras –el ELN (marcado por el guevarismo y la teología de la liberación), el EPL (maoísta) y el M19 (nacionalista)– surgen en ese periodo. Las FARC se distinguen de ellas porque permanecen subordinadas a un partido comunista particularmente ortodoxo, poco sensible a los cantos de las sirenas guevaristas y demás, atento ante todo a las luchas sindicales urbanas y a los resultados electorales, y ello incluso si mucha de su influencia la obtiene de su implantación rural. Esta ortodoxia hará que sobre el partido recaigan acusaciones de revisionismo por parte de las demás corrientes de izquierda y que la subordinación de las FARC ante él les valga durante mucho tiempo la misma stig-

matización. Jamás olvidarán esta afrenta y no dejarán de afirmar después su supremacía sobre las demás organizaciones armadas, aunque eso significara poner trabas a las tentativas de coordinación. La tutela del partido durante esta fase tendrá, sin embargo, la ventaja de ponerlas a buen resguardo de los desgarramientos y de los ajustes de cuentas internos que sacudirán a las demás organizaciones. Por otro lado, tendrá el inconveniente de evitarles la formulación de argumentaciones teóricas propias: el marxismo-leninismo de tipo soviético les resultará suficiente. El resultado: una ausencia de inventiva ideológica e intelectual que caracterizará su relación con lo político.

De hecho, hasta 1980 las FARC no rompen en verdad con su estilo anterior de autodefensa. Acantonadas en la periferia, no son motivo de gran preocupación para el régimen.

EL CAMBIO DE LOS AÑOS OCHENTA

Su salto cualitativo y cuantitativo no interviene sino hasta 1982: en su séptima conferencia, las FARC deciden duplicar el número de sus frentes y elaboran un plan estratégico para tomar el poder en algunos años. Las modificaciones de los contextos nacional e internacional pueden explicar esta evolución: agravamiento de los conflictos centroamericanos, endurecimiento represivo del régimen colombiano en respuesta al aumento de los movimientos sociales y a las tentativas del M19 de llevar por primera vez la lucha armada a las ciudades. Sin embargo, lo que va a cambiar profundamente a Colombia es, ante todo, la penetración constante de la economía de la droga, al principio mediante laboratorios y rutas de exportación, y luego cada vez más por medio de cultivos. La corrupción y el terrorismo de los cárteles, a finales de la década, van a sacudir a las instituciones, lo que la guerrilla no había logrado hacer fuera de algunas acciones espectaculares del M19, como la toma del Palacio de Justicia en 1985.

La reorientación de las FARC supone que se doten a sí mismas de los recursos económicos que hasta entonces les hacían falta. Los secuestros con rescate, la extorsión y la malversación de las finanzas locales, en los lugares donde podían infiltrarse en las administraciones, se vuelven algunas de sus prácticas rutinarias. La economía de la droga, sin embargo, va a convertirse en una parte creciente de sus ingresos, primero en la modalidad de impuestos

que cobran a los cultivadores de coca y a los traficantes, y luego, a partir de 1994, en la de su implicación en todas las etapas, desde la producción y los laboratorios hasta las rutas de salida. La economía de la droga no les garantiza sólo recursos económicos, sino también los medios para ampliar su base social. Los recién llegados de las regiones de cultivo están lejos de seguir siendo “campesinos” a la antigua: no todos ellos son rurales y muchos llegan con la ilusión de poder acumular rápidamente algún dinero e irse después. La actividad ilegal, sin embargo, no puede desarrollarse si la población no dispone de una “protección” que limite los riesgos de anomia y los abusos de los traficantes o de las fuerzas del orden. Las FARC se tornan en estos “protectores”. El trabajo de persuasión política pasa con frecuencia a un segundo plano, pero adquieren una capacidad de control social sin precedente y un abundante semillero de reclutamiento rural. Los jóvenes, que poseen un nivel de educación elemental, por no decir nulo, y que no tienen la posibilidad de acceder a empleos legales, ven en ellas una especie de cuasi Estado que define sus horizontes. En 2000, más del 80 por ciento de sus efectivos, incluidos los cuadros, provienen de dicho universo rural. Esta homogeneidad social es un factor suplementario de cohesión organizacional.

El control social que ejercen las FARC en sus zonas de implantación estable no está, por supuesto, exento de limitaciones. Éstas se vuelven aún más manifiestas en las nuevas regiones que las FARC se esfuerzan por conquistar: ahí usan la fuerza sin preocuparse de los sentimientos de la población y siguen sin otorgarle en contrapartida seguridad u otras ventajas notables. La intimidación, y hasta el terror, prevalece por todas partes, con su estela de secuestros y ejecuciones.

HACIA LA SUPREMACÍA DE LA ESTRATEGIA MILITAR

A finales de los años noventa se produce otro cambio: la tutela del partido comunista sobre las FARC desaparece y la guerrilla se vuelve autónoma por completo. Sin embargo, en 1985 las FARC y el partido habían intentado crear una formación política más abierta, la Unión Patriótica, en beneficio de una tregua provisional pactada con el gobierno. Pero muy pronto se había vuelto el blanco de una campaña de exterminio realizada por una coalición de fuerzas “oscuras”, que incluía a miembros de las fuerzas del orden, a políticos

locales y a narcotraficantes: al menos 2500 de sus afiliados habían sido asesinados, entre los que se encontraban, en primer lugar, los cuadros y los militantes del partido. El partido queda exangüe. Al contrario, las FARC no dejan de incrementar su poder territorial y militarmente. En estas condiciones, no es sorprendente que tomen en sus manos la dirección estratégica. Pero, a manera de orientación política, prefieren optar con claridad por la supremacía de una estrategia propiamente militar. Además de la tragedia de la Unión Patriótica, la muerte de Jacobo Arenas las incita a ello. La disolución de la Unión Soviética las deja por otra parte sin modelo y el debilitamiento de los conflictos de América Central pone fin a los sueños de revolución continental. Por lo demás, en 1990-91 estos acontecimientos conducen al M19 y al EPL a deponer las armas. Así, las FARC y el ELN prosiguen solos el combate.

Ambos están determinados a aprovechar el profundo debilitamiento de las instituciones colombianas desde 1985, derivado del terrorismo a gran escala que despliegan el cártel de Medellín y sus redes aliadas. La reunión de una Asamblea Constituyente en 1991 permitió, indudablemente, su renovación profunda, pero sin interrumpir la dinámica de violencia.

La evolución del ELN no se abordará aquí: nos limitaremos a subrayar que después de haber dominado también territorios de gran importancia económica y de haber dado prueba de una combatividad considerable –luego de haber hecho de los secuestros, igualmente, una de sus prácticas preferidas–, sufrió con saña, a finales de la década de los noventa, un asalto paramilitar, y que con ello perdió lo esencial de su potencial beligerante. En 2006, el gobierno de Uribe quiso llegar con él a un acuerdo negociado, pero sin tener éxito.

Las FARC disponen de un potencial de acción muy superior. La supremacía de lo militar tiene para ellas la ventaja de facilitar el mantenimiento de su cohesión. Tomar el poder por las armas hace las veces de programa. Durante su octava “conferencia” en 1993, las FARC confirman su decisión de lanzar una ofensiva general contra el régimen.

Esto se traduce, de 1995 a 1999, en el abandono de las tácticas guerrilleras habituales en beneficio de los ataques masivos, que agrupan a cientos, y a veces hasta a mil guerrilleros, y en victorias contundentes: toma de guarniciones militares y de cientos de prisioneros, destrucción de unidades de

elite, ocupación de numerosos caseríos. Al mismo tiempo, las FARC empiezan a rodear las principales ciudades y a reclutar en ellas a “jóvenes”, en el marco de las “milicias bolivarianas”. No son pocos los analistas que predicen que las FARC sí podrían hacerse efectivamente del poder. En 1998, el gobierno mismo parece estar lo suficientemente temeroso de que esto sea verdad como para decidir entablar negociaciones, y no duda para ello en desmilitarizar una zona de 42 mil km², como lo exige la guerrilla. Esta ya no sólo se jacta de su longevidad y su cohesión, sino también de haber llevado a cabo una estrategia que acorraló al gobierno. Sus efectivos alcanzan en ese entonces los 17 mil miembros.

LOS COSTOS DE LA INCAPACIDAD POLÍTICA

Es en este momento, no obstante, cuando se revelan las carencias políticas de las FARC. Durante tres años y medio, las negociaciones les permiten ser reconocidas como “actor político” y disponer de una tribuna. Aún así, se muestran incapaces de formular nuevas propuestas o de emprender acciones que amplíen su cantidad de simpatizantes. Limitándose a recordar sus viejas reivindicaciones agrarias, dan pruebas constantes de su ignorancia respecto de la Colombia urbana y moderna, y hasta del desprecio que les causa. Lejos de tratar de volver a la “sociedad civil” una aliada, proclaman que son “la sociedad civil en armas”.

En estas condiciones, la opinión pública, que había visto con buenos ojos lo que prematuramente se había dado en llamar “proceso de paz”, se vuelve en su contra y a las únicas que responsabiliza de su estancamiento es a las FARC. La frustración se convierte en exasperación cuando la guerrilla parece tratar, sobre todo, de sacar provecho de las negociaciones para ampliar su influencia y constituir “territorios liberados” asesinando a los representantes locales u obligándolos a refugiarse en otras partes. A esto se añade la continuación de los secuestros y la destrucción de caseríos. Así se va preparando el total cambio de opinión. La ruptura de las negociaciones en febrero de 2002 se recibe con alivio. Crítico acerbo del “proceso de paz”, Álvaro Uribe, quien durante mucho tiempo había pasado por un simple competidor sin posibilidades de triunfo en la elección presidencial de 2002, se convierte en el portavoz de este enojo y gana en la primera vuelta.

Esta elección constituye un giro político mayor. Hasta entonces, el régimen había alternado siempre los momentos de búsqueda de una solución negociada con la guerrilla con los de enfrentamiento. Partidario declarado de una solución militar al problema de la guerrilla, Uribe está resuelto, por su lado, a hacerlo todo para lograr que su debilitamiento sea definitivo. Esta política le va a valer una popularidad sin precedente y, luego de una revisión de la constitución, una reelección todavía más holgada en 2006. En este sentido, la última fase se empieza a llevar a cabo menos en el terreno militar que en el político.

DEL REPLIEGUE A LA DESMORALIZACIÓN

Los reveses militares de las FARC llegan pronto. La estrategia de Uribe cabe en una expresión, la “seguridad democrática”, y pasa, ante todo, por la modernización de las fuerzas armadas colombianas. Una modernización en realidad ya emprendida durante el gobierno de su predecesor, Andrés Pastrana. Desde 1999, la adquisición por parte del ejército de nuevo equipamiento aéreo obliga a las FARC a renunciar a los ataques masivos y a regresar a las tácticas de guerrilla. Pero el cambio de dirección decisivo data de la adopción, en 2000, del Plan Colombia, que prevé una ayuda estadounidense por mil millones de dólares anuales. Destinada en principio a la destrucción de las plantaciones de droga, la ayuda contribuye de manera simultánea al suministro de armamento de alto poder, que sirve también contra la guerrilla. Se añade al crecimiento sostenido del presupuesto militar colombiano –uno de los más bajos de Latinoamérica hasta 1992, se convierte en uno de los más elevados del mundo en 2008, con un 6.2 por ciento del PIB–. Los efectivos militares tienen un crecimiento continuo, el porcentaje de soldados profesionales aumenta de manera simultánea, se implantan o se vuelven a establecer puestos militares y policiacos en todas las comunas, la coordinación entre ejércitos se hace mayor, se constituyen unidades adaptadas a los diversos terrenos de combate, se mejoran los servicios secretos en todas sus formas, humanos y técnicos. Desde 2002-2003, aparecen los primeros resultados: se rompe el acorralamiento de las grandes ciudades y la seguridad regresa poco a poco en los ejes carreteros de envergadura.

No obstante, hasta 2004 el debilitamiento militar de las FARC se debe menos a esta modernización que a las acciones emprendidas por los grupos llamados “paramilitares”. Tales grupos existen desde principios de los ochenta. Pero hacia 1993, comienzan a expandirse y en 1997 se proponen coordinar sus operaciones contra la “subversión” con la formación de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Financiados por las redes del narcotráfico y dirigidos por lo demás cada vez con mayor frecuencia por algunos de sus capos más importantes, los paramilitares se concentran en recuperar las regiones que están bajo control de la guerrilla, no enfrentándose con ella de manera directa, sino haciéndole el vacío a su alrededor. El uso del terror contra la población civil, las matanzas sistemáticas y las atrocidades comparables a las de La Violencia, están en la base de su contraofensiva. Además de las miles de víctimas, estos procedimientos tienen como resultado movimientos masivos de población. En la actualidad, se estima en dos o tres millones el número de personas “desplazadas” y, si bien la guerrilla tiene su parte de participación en esto, la de los paramilitares representa las cuatro quintas partes de los casos.

Desde 2000, los paramilitares logran así rechazar a la guerrilla de las regiones claves, como Urabá, en el norte del país, o el Valle del Magdalena Medio. Prosiguen luego sus acciones hasta los feudos de las FARC, en el sur y el oeste de Colombia. Con ello, no se limitan a obligar a la guerrilla a replegarse territorialmente, sino que cortan de tajo la lógica de protección en la que basaba su influencia, y hacen que ceda cada vez más el lugar a la coerción. El miedo gobierna también un gran número de sus zonas de influencia. El perfil social de los jóvenes guerrilleros no es muy distinto al de los jóvenes paramilitares. Las fronteras que marcan el poder de cada campo se vuelven movedizas e inciertas. También se tornan porosas. No faltan ejemplos de guerrilleros que se unen a los paramilitares y les sirven luego de informantes. Unos y otros se disputan acremente zonas de cultivo de coca y rutas de exportación, y no es una casualidad que el conflicto, particularmente brutal, se prolongue todavía hasta hoy. Las hostilidades, sin embargo, no están exentas de transacciones: se vuelven inevitables por la participación conjunta en el narcotráfico.

El avance tan rápido de los paramilitares no habría podido producirse si no hubiesen contado con un amplio apoyo de las élites locales y nacionales.

A partir de 2007, la amplitud de las colusiones empieza a aparecer a plena luz del día con la denominación de “parapolítico”. Son muchos los representantes populares que no deben su éxito más que a los pactos realizados con los paramilitares. De ahí en adelante 60 miembros del Congreso son sometidos a examen o inculcados; entre ellos, hay muchos cercanos al presidente Uribe. Pero este avance se habría realizado en mucho menor medida sin la tolerancia y a menudo participación de numerosos militares, incluso de alto rango. Este es otro escándalo que está estallando. Las ONG de derechos humanos habían denunciado esta colaboración desde hacía mucho, pero las pruebas se van acumulando desde la implicación directa de militares en las atrocidades y las matanzas. Ciertamente, en 2005 el gobierno logró la desmovilización de 30 mil paramilitares gracias a la adopción de una ley de “Justicia y Verdad”, que a cambio de la confesión de los crímenes, limita las penas a ocho años de prisión sin importar cuán graves hayan sido. Esta desmovilización permite la caída del número de matanzas y asesinatos. Sin embargo, se han formado nuevos grupos mitad paramilitares, mitad narco-trafficantes, cuyos efectivos es posible que alcancen ya las 10 mil personas. Hay un hecho más grave aún: el fenómeno paramilitar ya no se reduce a la existencia de bandas armadas, sino que penetra capas enteras de la sociedad. Lo menos que puede decirse es que la política de “seguridad democrática” conlleva un lado oscuro. Para colmo, la modernización militar empieza a hacer sentir plenamente sus efectos a partir de 2004. Las fuerzas armadas lanzan grandes operaciones que asocian bombardeos y acciones terrestres destinadas a alcanzar los bastiones más alejados de las FARC. También intentan alcanzar a los cuadros de la guerrilla. Esta doble estrategia empieza a ganar importantes éxitos en 2007. Muchos de los frentes de las FARC fueron puestos en dificultades. Varios comandantes y cuadros conocidos de las FARC son asesinados o capturados. En 2008, los resultados se vuelven aún más espectaculares. Se desintegran los frentes y, por primera vez, matan a dos miembros del Secretariado –la dirigencia de las FARC–, Raúl Reyes e Iván Ríos. El primero, que era el responsable internacional de las FARC, durante un ataque al campamento que había establecido en territorio ecuatoriano; el segundo, asesinado por su guardaespaldas algunos días después.

La desmoralización de una parte de los guerrilleros es de hecho cada vez más patente. Sus recursos económicos disminuyen debido a la pérdida

de territorios y a que los secuestros se vuelven menos frecuentes. El contraste entre los frentes ricos por su implicación con el narcotráfico y los demás se hace cada vez más visible, pero casi todos los guerrilleros tienen condiciones de vida miserables. El reclutamiento se vuelve menos fácil y se opera a menudo entre menores de edad. Las desertiones a partir de entonces se cuentan por cientos, y hasta por miles; a menudo, son de comandantes y combatientes aguerridos, a veces atraídos por el sistema de recompensas establecido por el gobierno. De acuerdo con las estimaciones oficiales, los efectivos habrían bajado a menos de nueve mil.

La muerte de Marulanda, en marzo de 2008 según las FARC, no puede sino acrecentar el desconcierto. Al haber ejercido hasta el final una autoridad incuestionable, Marulanda encarnaba la historia de la guerrilla, que hacía las veces de doctrina. Esto, con dos basamentos: la visión “campesinista” y el resentimiento hacia las elites.

La designación rápida de un sucesor, Alfonso Cano, miembro de la dirección desde los ochenta, aunque desprovisto de la misma aura, prueba en todo caso la preocupación de la guerrilla por seguir mostrando su cohesión.

EL FRACASO DE LA “POLÍTICA DE LOS REHENES”

En 2000, las FARC habían inventado una nueva categoría de rehenes, los llamados “rehenes políticos”, miembros de las fuerzas del orden pero sobre todo representantes populares o responsables políticos, entre quienes se puede mencionar a Ingrid Betancourt... Su número va a llegar a unos 50. Con ello, las FARC estaban determinadas a disponer de un medio de presión suplementario sobre el gobierno para exigir, llegado el caso, un “intercambio humanitario” entre ellos y los prisioneros de la guerrilla detenidos en las prisiones colombianas. A partir de 2007, las FARC convierten el problema del “intercambio humanitario” en prioridad. Debilitadas política y militarmente, lo que en realidad están buscando desde entonces es una salida política. Confían en que el problema les permita tener el reconocimiento internacional de su calidad de “parte beligerante”, suscitando la intervención de países extranjeros, de la Venezuela de Chávez en primer lugar, pero también de una Francia movilizada por el drama de Ingrid Betancourt. Resultaría demasiado largo recordar las repercusiones que resultaron de

esto. Nos limitaremos a enumerar las principales: intervención de Hugo Chávez como mediador oficial y luego como “facilitador” de facto; desavenencias de Chávez con Colombia a finales de 2007; ruptura de las relaciones diplomáticas de Venezuela y Ecuador con Colombia después de la muerte de Reyes en territorio ecuatoriano; entre tanto, liberación de varios rehenes por intervención de Chávez; para terminar, cambio de jugada por la operación militar del 2 de julio, que desemboca en la liberación de Ingrid Betancourt y de otros 14 rehenes “políticos”.

En definitiva, son las FARC y Chávez quienes pierden la partida. Las “pruebas de vida” de los rehenes que divulga la guerrilla a finales de 2007 arruinan su imagen al revelar los crueles tratamientos que les infligen. Los archivos extraídos de las computadoras de Raúl Reyes revelan los vínculos de Chávez con la guerrilla y lo vuelven un “facilitador” dudoso. Pero la liberación de Ingrid Betancourt es lo que les arrebató su carta más importante y arruina sus esperanzas de acceder a la escena política internacional.

No obstante, sería prematuro concluir que La Violencia está llegando a su fin. El Plan Colombia acaba en un completo fracaso en lo que se refiere a la droga: la producción y el tráfico de cocaína no han disminuido mucho. Sus ingresos siguen alimentando, además de a la corrupción, a las redes ilegales más diversas. La descomposición de varios frentes de las FARC tiene todas las posibilidades de provocar el paso de sus miembros hacia las redes de narcotraficantes o los nuevos grupos paramilitares. Esto ya está ocurriendo con claridad en varias regiones.

Sería apresurado, también, concluir que llegará la extinción de las FARC. Tal vez no deba excluirse que surjan divisiones entre los dirigentes actuales o que la presión de las fuerzas armadas no les deje los medios de asentar su autoridad. Pero algunos de sus dirigentes también pueden estar resueltos a proseguir la lucha contra el régimen, y en todo caso contra el gobierno actual. Convencidos de que a Uribe tarde o temprano lo alcanzará el escándalo del paramilitarismo y de que, a pesar de sus ambiciones cada vez más manifiestas, no logrará obtener un tercer mandato, pueden apostarle a que podrán volver a encontrarse en mejor posición si aguantan todavía un poco más.

Después de todo, Marulanda fue siempre partidario de una estrategia de “guerra prolongada”. Logró llevarla a cabo de manera efectiva durante

medio siglo, lo que ya representa una especie de proeza. Aquellos que acaban de relevarlo pueden estimar que seguirla perpetuando equivaldría a rendirle un homenaje póstumo. 